

FORO ECONOMIA Y TRABAJO

APRENDER DE LA HISTORIA

Diciembre 2025

El 15 de diciembre de 2005, el entonces Presidente Néstor Kirchner confirmó una decisión política estratégica al anunciar el pago total de la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y encargó su ejecución a su ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli.

Es ineludible conmemorarlo cuando vivimos las trágicas consecuencias de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de volver, a partir de 2018, a endeudarse y depender de ese organismo en las decisiones de política económica.

En aquel entonces, nuestro país venía arrastrando un pasivo con ese organismo, contraído durante los años '80 y '90, que alcanzaban a 9.810 millones de dólares, deuda que, como ha sucedido históricamente con el FMI, solo sirvió para financiar la fuga de capitales que se produjo en esos años, como también sucede ahora.

Néstor Kirchner trazó una clara política desde el comienzo de su mandato: el desendeudamiento de la Argentina. Recibió un país en default y con negociaciones empantanadas con el FMI. Y se trazó un camino sencillo y posible: lograr mantener los superávits gemelos –fiscal y comercial externo–, hacer crecer la economía, fortaleciendo el mercado interno y las exportaciones, mientras, simultáneamente, se incrementaba el empleo formal y el poder adquisitivo de la población, mejorando la distribución del ingreso.

La acumulación de reservas internacionales genuinas, provenientes del saldo positivo del comercio exterior, se convirtió en un objetivo prioritario durante los años de su gobierno. En un país de recurrente escasez de divisas generada por una descontrolada fuga de las que obtenemos por nuestra producción, la fortaleza externa fue considerada como lo que es: la mejor garantía de estabilidad cambiaria y de precios ante posibles ataques especulativos.

Esa solvencia fue lograda en base a una detallada y eficaz regulación tanto de la balanza comercial como de la cuenta capital del Balance de Pagos.

Cuando asumió Néstor Kirchner el país contaba con 8.250 millones de dólares de reservas internacionales, de las cuales solo la mitad eran de libre disponibilidad, mientras que a fines de 2005 estas últimas se habían incrementado a 26.800 millones de dólares, a fuerza de ahorrar la mayor parte del superávit comercial externo de cada año.

Esa fue la fortaleza que permitió pagarle al FMI. No se consiguió de un día para otro. Fue una estrategia pensada desde el inicio de su gestión, un camino elaborado para llegar al objetivo de lograr mayor autonomía en el diseño de la política económica. Ya en marzo de 2004 Kirchner había advertido ante el Congreso de la Nación: “No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía, mejorará nuestra capacidad de pago”.

A cuatro meses del inicio de su gobierno, en setiembre de 2003 el país había firmado un programa *stand-by* a tres años para reestructurar la deuda contraída por los gobiernos de Menem y de De la Rúa. Venía pagando los vencimientos, mientras era sometido a una serie de revisiones y controles de cumplimiento de metas. Además, debía cumplir con las exigencias habituales que impone el organismo: ajuste fiscal cada vez mayor, privatizaciones —la del Banco Nación, entre ellas— o la participación de un grupo de bancos privados para la reestructuración de la deuda con acreedores privados que se encontraba en default, lo cual finalmente fue realizado por el Ministerio de Economía.

Según palabras del propio Presidente Kirchner: “Esa deuda ha sido un constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines, el Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”.

Resulta claro que este entrometimiento en la política nacional no era para nada compartido por lo que, dada la solvencia en las reservas internacionales, el gobierno argentino, en acuerdo con el de Brasil, decidió el pago total de la deuda con el organismo. Así lo dijo en ese entonces: “Se trata de un paso largamente conversado con los señores Presidentes del Mercosur en general, y especialmente con el Presidente Lula Da Silva, a quienes agradecemos, como también al apoyo permanente recibido de la República Bolivariana de Venezuela”.

Habían pasado dos años y medio desde la asunción de Néstor Kirchner. Se había levantado el default, el crecimiento económico era a tasas chinas, con políticas heterodoxas, con creación de empleo formal y redistribución del ingreso, sin tarifazos ni privatizaciones. Después de más de 30 años de políticas

antinacionales y antipopulares, el país había avanzado por otro rumbo con un modelo productivo con inclusión social. Y el pago total al FMI consolidó ese camino.

Por supuesto, que hubo detractores de todo tipo para esa decisión. La principal objeción era que se comprometía el 36,6% de las reservas del país, que de 26.800 millones de dólares pasaban a 16.990 millones. Y que se cancelaba deuda “barata”. Ninguna de las tormentas catastróficas que pronosticaron se produjo.

En setiembre de ese mismo año la cantidad de reservas ya era superior a las existentes al momento de pagarle al Fondo. Tampoco el valor de la divisa se alteró ni apareció ningún tipo de brecha entre mercados, fluctuando en valores de alrededor de \$3,08 por dólar, tanto en el mercado oficial como en el *blue*.

Y en cuanto al costo del endeudamiento, hay que destacar que hubo un ahorro significativo de divisas, ya que, de las reservas utilizadas para el pago, una parte estaba depositada en el Banco Internacional de Basilea –unos 5.400 millones de dólares– devengando un interés del 1,5% anual, mientras que el país le abonaba al FMI, por tasas, comisiones y sobrecargos, casi dos puntos más. El resto, unos 4.200 millones de dólares, estaba directamente constituido en Derechos Especiales de Giro (DEG), con lo cual no se recibía ningún tipo de remuneración por esta parte, pero sí se debían pagar los intereses correspondientes.

Todo ello permitió reducir el riesgo país, el indicador medido por el JP Morgan, a 216 puntos a finales de 2006, un valor más bajo que el logrado durante la convertibilidad, cuando el neoliberalismo imponía sus políticas en nuestro país.

Regresión con Macri y Milei

Ese valor nunca más se ha vuelto a repetir, ni siquiera durante la gestión de gobiernos como los de Macri y Milei, que han recibido apoyo y financiamiento tanto de los mercados financieros como del Fondo y que, a diferencia de lo acontecido en 2006, han aplicado y aplican medidas de ajuste extremo, sometiendo a la pobreza, la indigencia y el desempleo a grandes mayorías nacionales y destruyendo el aparato productivo, imponiendo la centralidad de la especulación financiera como todo plan económico.

Doce años pasaron sin la intromisión del FMI en la política económica interna del país. Macri lo trajo de vuelta con un acuerdo *stand by* de 57.000 millones de dólares, del que se desembolsaron 45.500 millones. Una operación que permitió la salida de capitales especulativos casi al mismo tiempo en que se realizaban los desembolsos, como lo señala el Informe del Banco Central [\[1\]](#), y que cuenta con graves inconsistencias:

- Deficientes estimaciones para el diseño del Programa y evaluaciones de sostenibilidad de la deuda, con vencimientos pautados de casi 20.000 millones de dólares los primeros años, inconsistentes con las posibilidades reales de generación de divisas por parte del país;
- Incumplimiento de los criterios establecidos por el FMI para que el país haya obtenido el Acceso Extraordinario (PAE);
- Vulneración del artículo 6° del Estatuto del FMI que determina con total claridad que no se podrán “utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”;
- Aspectos jurídicos incumplidos en la Argentina, ya que no se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera (ley 24.156), que establece que se debe pedir una opinión al BCRA respecto a la sostenibilidad de la deuda que se contrae, y al momento de suscribir los documentos con el FMI no había siquiera un expediente iniciado en ninguna de las áreas de la Administración Pública Nacional involucradas.

Por todo ello queda claro que el *stand by* de 2018 ha sido un préstamo de carácter netamente político, otorgado para que Macri fuese reelecto en la presidencia de la nación y, si eso no ocurriese, condicionar las acciones de un futuro gobierno de otro signo partidario.

Deuda odiosa

Hoy, cuando ni siquiera tenemos información completa del último acuerdo logrado con el FMI por el gobierno de Milei-Caputo, ni tampoco de los compromisos asumidos por el financiamiento que les otorgó directamente el Tesoro de los Estados Unidos, solo podemos repetir, como ya lo hicimos desde este Foro, que, al no cumplirse con los pasos jurídicos pertinentes, este último acuerdo debe catalogarse como deuda odiosa.

Pasaron 20 años. Qué lejos estamos de aquella decisión estratégica en que el pago al FMI significó recuperar la autonomía en las decisiones de las políticas públicas, elevando a su nivel más alto la bandera de la independencia económica.

Unidad con contenido por la independencia económica

No hay ninguna duda que nuestro país ineludiblemente necesita abandonar esta política de entrega y sumisión, puesto que los argentinos y argentinas hemos pagado y lo seguimos haciendo, no sólo con la devolución del capital, los

intereses, cargos y comisiones que el Fondo le cobra al país, sino, y fundamentalmente, con el empobrecimiento de nuestra sociedad, la cesión de recursos naturales y la progresiva pérdida de nuestra independencia como nación ^[2].

Sin duda, para volver a ser independientes necesitamos dejar de lado [mezquindades inaceptables que están postergando una unidad con contenido](#), expresada en un proyecto común, una estrategia con acciones y compromisos claros con todos los sectores vinculados al interés nacional. Necesitamos comprender que la historia enseña, de ella se aprende, pero la nostalgia no soluciona los problemas del presente.

Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Norberto Crovetto, Juan Pablo Costa, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Rodolfo P. Treber y Eduardo Berrozpe (coordinador).

El Foro Economía y Trabajo está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que participan en la articulación de un **programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales**. foroeyt@gmail.com

^[1] Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019.

^[2] Hoy la Argentina no solo está bajo programas del FMI ilegalmente acordados e irregularmente autorizados, sino que depende directamente del Tesoro de los Estados Unidos. La falta de dólares es creciente, no solo porque hay que pagar las importaciones acrecentadas por una apertura comercial irrestricta, sino además por la remisión de utilidades al exterior, los pagos de la deuda y sus intereses, la fuga de capitales, que constituye el principal problema que afecta a nuestra economía, que comprende a otro: la evasión o elusión impositiva. Son causas también de la insuficiencia de las inversiones públicas y privadas, del déficit de nuestra balanza de pagos y

del desequilibrio fiscal, que tiene su origen en una estructura regresiva del sistema tributario y la falta de eficacia del Estado en la lucha contra la evasión impositiva.